

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA**

Auto

EXPEDIENTE: 76-001-23-33-000-2019-01066-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: YEIMY GRAJALES CARMONA
DEMANDADO: ROBERTO ORTIZ UREÑA – CONCEJAL DE CALI

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V) cuatro (04) de agoto de dos mil veinte (2020)

Decide la Sala sobre la legalidad del impedimento propuesto por el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, para conocer sobre el asunto de la referencia, quien manifestó encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 4° del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011.

LA ANTECEDENTES

La señora Yeimy Grajales Carmona promovió acción pública de nulidad electoral en contra del señor Roberto Ortiz Peña en su calidad de Concejal del Municipio de Cali, correspondiéndole por reparto al Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume.

IMPEDIMENTO PROPUESTO

Encontrándose el presente proceso para continuar con el trámite correspondiente, una vez decidido el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto que negó la medida cautelar, el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, manifestó que podría estar impedido para seguir conociendo del proceso de la referencia, considerando que se encuentra incurso en la causal señalada en el numeral 4° del artículo 130 del CPACA, y para ello argumentó lo siguiente:

“Lo anterior teniendo en cuenta que el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, del cual es concejal el demandado, puede tener un interés en el resultado del proceso, de modo que el suscrito Magistrado observa una causal de impedimento para conocer del asunto en referencia, al tener mi señora esposa, la doctora JENY PAOLA MONTERO JIMENEZ, un vínculo contractual como asesora jurídica de dicho ente territorial, causal que se encuentra descrita en el numeral 4° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

CONSIDERACIONES

El impedimento y la recusación han sido concebidos como instrumentos idóneos establecidos por el legislador para hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o del funcionario judicial en la toma de decisiones. Uno y otra son figuras legales que permiten observar la transparencia dentro del proceso judicial y que autorizan a los funcionarios judiciales a alejarse del conocimiento del mismo. Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al Juez, y como tal, están debidamente delimitadas por el legislador y no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes, por cuanto, la escogencia de quien decide no es discrecional.

Para que se configuren debe existir un “interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial.”. Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que comprometan su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso. La imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, están orientadas a garantizar que las actuaciones se ajusten a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad, sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública, artículo 209 de la Constitución Política.

Para resolver, se debe tener en cuenta que, en cuanto al trámite y competencia de los impedimentos propuestos por los Magistrados, el numeral 3º del artículo 131 de CPACA establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 131. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se efectúe el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez.”

En consecuencia, se procederá a resolver sobre la legalidad del impedimento manifestado por el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, precisando lo siguiente:

Como se anotó, el referido Magistrado considera encontrarse en la causal de impedimento descrita en el numeral 4º del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, del siguiente tenor:

“Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

(...)

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados.”

Ahora bien, de la revisión integral del proceso se constata que el medio de control electoral que nos ocupa fue dirigido en contra de un edil del concejo de Cali, la registraduría nacional del estado civil y el consejo nacional electoral, así mismo fue notificado el concejo de Cali, sin que se haya vinculado el municipio de Cali como parte, por ende, la causal de impedimento no tiene fundamento ni factico ni jurídico ya que la proposición jurídica expuesta es clara en dicha exigencia.

Sin embargo, se debe señalar que en materia de medio de control electoral las corporaciones de elección popular se encuentran habilitadas para intervenir directamente, sin la comparecencia del Municipio entidad sobre la cual recae inclusive falta de legitimidad por pasiva, como lo ha establecido el Consejo de Estado, en providencia del 17 de junio de 2016¹:

“De acuerdo con las consideraciones expuestas, que la Sala reitera en esta oportunidad, si bien es cierto el Concejo Municipal de Tunja carece de personería jurídica, está habilitado por la ley para intervenir directamente en el presente medio de control de nulidad electoral, porque tiene capacidad para ser sujeto procesal, atribuida por el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.

Así las cosas, la Sala revocará la decisión de negar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Tunja, el cual, en consecuencia, deberá ser desvinculado del trámite del presente proceso, para que en su lugar sea vinculado el Concejo Municipal de dicha entidad territorial, no sin antes advertir que todas las actuaciones surtidas por el Tribunal de instancia que se vean afectadas por esta decisión carecen de validez y que deberán realizarse nuevamente aquellas afectadas por la necesidad de vincular al proceso a dicha corporación pública, dado que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión recurrida fue erróneamente otorgado en el efecto devolutivo y no en el suspensivo, como fue explicado previamente”.

Conforme a lo expuesto, en el presente caso no se encuentra configurada la causal por ende se declarará infundado el impedimento formulado por el magistrado Ronald Otto Cedeño Blume.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión;

RESUELVE

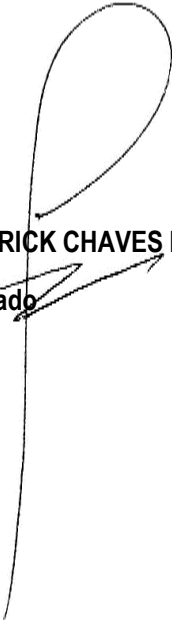
PRIMERO. - Declarar infundado el impedimento manifestado por el Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, de conformidad con lo argumentado en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO. - Comunicar por la Secretaría del Tribunal lo aquí decidido al Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume.

Providencia discutida y aprobada en Sala de Decisión.

Notifíquese y Cúmplase,

¹ M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 15001-23-33-000-2016- 00119-01 (2016-0119); Actor: Pedro Javier Barrera Varela.



JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado